

# BOLETÍN JURISPRUDENCIAL No. 07 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



---

## Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

## Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

---

# TABLA DE CONTENIDO

## ACCIÓN DE TUTELA

Rad. 41 001 33 33 009 2023 00303 01  
Derecho al Consumo de Agua Potable – No se Demostró Perjuicio Irremediable por la Acción u Omisión de las Accionadas [pág. 4](#)

## ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Rad. 41 001 33 33 005 2023 00227 01  
Norma Procesal Disciplinaria / Incumplimiento de los Términos Estuvo Justificada [pág. 9](#)

## ACCIÓN POPULAR

Rad. 41 001 23 33 000 2022 00036 00  
Vulneración Derechos Colectivos por Afectación de Fuentes Hídricas / Hecho Superado / Órdenes de Control Permanente sobre Potabilidad de Agua [pág. 9](#)

Rad. 41 001 23 33 000 2022 00050 00  
Vulneración Derechos Colectivos por Suministro Irregular de Servicio de Agua Potable / Aprobación de Pacto de Cumplimiento [pág. 12](#)

## NULIDAD ELECTORAL

Rad. 41 001 23 33 000 2023 00058 00  
Acto Administrativo de Nombramiento de Docente Expedido con Infracción en la Norma en que Debía Fundarse / No Acreditación del Requisito Mínimo de Experiencia en Docencia Universitaria [pág. 14](#)

## NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Rad. 41001 33 33 006 2018 00099 01  
Improcedencia de la Estabilidad Reforzada de Trabajadora / Provisión de Cargo a Quien Superó el Concurso de Méritos [pág. 16](#)

Rad. 41 001 23 33 000 2015 00669 00 y 41 001 23 33 000 2016 00372 00  
Pensión de Sobrevivientes a Hijos- Requisitos Acreditados / Pensión de Sobrevivientes a Cónyuge - No Basta Acreditar Únicamente el Vínculo sino También Convivencia Mínima de 5 Años [pág. 18](#)

Rad. 41 001 33 33 007 2019 00381 01  
Prima Extralegal / Legalidad de Acto Administrativo que no Continúa Reconociendo Prima de Antigüedad y Prima Técnica Departamental [pág. 21](#)

## REPARACIÓN DIRECTA

Rad. 41 001 33 33 001 2013 00399 01  
Responsabilidad por Omisión de Registro de Embargo de Vehículo - Acreditada / Aunque La Oficina de Transito Informó el Registro, no se Materializó [pág. 23](#)

Rad. 41 001 33 33 006 2019 00195 01  
Falla del Servicio por Incumplimiento del Deber de Custodia, Vigilancia y Cuidado - Acreditada / Daño al Estudiante en Establecimiento Educativo [pág. 25](#)

Rad. 41 001 33 33 705 2015 00249 01  
Exceso de Autoridad por Fuerza Pública / Falla del Servicio no Acreditada / Lesiones Ocasionadas a Menor Fueron Consecuencia de Forcejeo [pág. 27](#)

## CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Rad. 41 001 23 33 000 2019 00577 00  
Procedencia de la Liquidación Unilateral del Contrato Estatal / Entidad Contaba con la Facultad para Liquidar Unilateralmente el Contrato [pág. 29](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Jorge Alirio Cortés Soto
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 009 2023 00303 01
<b>Accionante:</b>	Iván Enrique Reyes Villalba en representación de su hija VRS.
<b>Accionado:</b>	Municipio de Palermo y Otro
<b>Fecha:</b>	11 de diciembre de 2023

## DERECHO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE – NO SE DEMOSTRÓ PERJUICIO IRREMEDIABLE POR LA ACCIÓN U OMISIÓN DE LAS ACCIONADAS

### Problema Jurídico

- i) ¿Se debe adicionar a la sentencia de primera instancia y ordenarse que en la Institución Educativa El Juncal se suministre agua potable en botellones para el consumo de los estudiantes y para la confección de los alimentos en el programa de alimentación escolar, así como la práctica de exámenes de laboratorio de la menor VRS y de todos los estudiantes de dicha institución para establecer el nivel de contaminación con flúor en sus cuerpos?
- ii) ¿Se debe revocar la sentencia impugnada porque no se demostró que el agua que se suministra a los estudiantes del colegio y a los habitantes del centro poblado El Juncal, no es apta para su consumo por tener contaminación con Flúor?
- iii) ¿Se debe revocar la sentencia impugnada, porque no se demostró que el consumo de agua del acueducto de El Juncal sea la causa de la fluorosis y afectaciones de salud (dolor en las rodillas, problemas de aprendizaje, machas de los dientes) que adolece la menor VRS y demás estudiantes del colegio de dicho centro poblado?
- iv) ¿Es procedente la tutela para amparar derechos colectivos sobre los mismos hechos y pretensiones que contiene la acción popular con radicado 41001333300920200001900, pendiente de fallo y la acción popular con radicado 41001333300420140030000 con sentencia del 31 de agosto de 2016 que negó las pretensiones porque no encontró probada dicha afectación?
- v) ¿El señor IVÁN ENRIQUE REYES VILLALBA está legitimado para actuar en representación de los estudiantes de la Institución Educativa y población de El Juncal?

El Tribunal considera que se debe revocar la sentencia recurrida, pues: a) el demandante sólo se encuentra legitimado procesalmente y con legitimación para llevar la representación de su hija menor de edad VRS y no de toda la población estudiantil y residentes de dicho centro poblado, b) la tutela no es procedente para la protección de los derechos colectivos de la población de El Juncal y c) no se acreditó ninguna acción u omisión de las demandadas en la generación de los padecimientos que la aquejan la salud de la menor actor...”

## Extracto

“Es que, aunque el demandante demostró que ha realizado gestiones en la EPS de su hija con el fin de establecer el nivel de flúor en su cuerpo, no se ha allegado una valoración médica que determine que la enfermedad de la menor es por contaminación con flúor y que ello se ha originado en la ingesta del agua o de alimentos cocinados con agua con alto contenido de flúor en la Institución Educativa del Juncal o en el Centro Poblado.

Ahora bien, para probar tales afirmaciones, el demandante allegó tesis e investigaciones suscritas por estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Surcolombiana, artículos científicos de revistas y notas periodísticas, que si bien reportan que han existido problemas de salud derivados del flúor en dicha comunidad, ninguna de ellas constituye una prueba científica que permita concluir más allá de toda duda que es el motivo de los problemas de salud de su hija para proceder al amparo de sus derechos fundamentales individuales e incluso, abarcar la protección de derechos colectivos.

Al punto que en esta segunda instancia el demandante continúa remitiendo solicitudes a su EPS con la intención de establecer la afectación de sus tres hijas por el flúor que han podido ingerir, lo cual se comprende porque en el trámite de la tutela al ser una acción expedita no es el escenario donde se logre el recaudo y contradicción de exámenes, peritazgos y estudios científicos que corroboren que la salud de dicha menor se ha deteriorado por el consumo de agua y alimentos contaminados con flúor, mucho más cuando manifiesta que gran cantidad de la población del Juncal presenta los mismos síntomas a raíz de la ingesta del agua y ello demandaría la evaluación médica y exámenes de una muestra representativa de dicha población para señalar que se trata de una situación de salubridad pública.

Por esa razón, no es posible amparar los derechos constitucionales fundamentales para lo que se pide protección de VRS y tomar medidas con efectos intercomunis y más cuando el a quo ha advertido que en su despacho existe una acción popular con radicado 41001333300920200001900, donde se pretende el amparo de derechos colectivos sobre los mismos hechos que ha denunciado el señor Reyes Villalba y se

encuentra a la espera de proferir el fallo de primera instancia, por lo cual aún tiene la posibilidad de coadyuvarla, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 472 de 1998.

Y si bien Empresas Públicas de Palermo ESP ha manifestado que en la acción popular con radicado 41001333300420140030000 con sentencia del 31 de agosto de 2016 del Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, se negó la protección de derechos colectivos sobre asuntos similares a esta acción, con las pruebas aportadas por el demandante se ha logrado establecer que con posterioridad a esa fecha han existido elevados índices de flúor en el agua que se suministra en el Centro Poblado El Juncal, por lo que hay lugar a analizar si a la fecha se están vulnerando los derechos de toda la comunidad, pero a través de la acción popular que se encuentra pendiente de que se profiera sentencia.

En esa medida, habrá lugar a revocar la decisión del a quo, por las razones descritas con anterioridad, pues en esta acción de tutela no se logró establecer la vulneración de derechos fundamentales de la menor VRS o de otros menores que asisten a la Institución Educativa El Juncal y menos de los habitantes del centro poblado del mismo nombre, con el fin de evitar un perjuicio irremediable por la acción u omisión de las accionadas.”

[Sentencia del 11 de diciembre de 2023, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001333300920230030301](#)



**Magistrado Ponente:** Gerardo Iván Muñoz Hermida  
**Instancia:** Segunda  
**Radicación:** 41 001 33 33 005 2023 00227 01  
**Accionante:** Kevin David Arriguí Vargas y Otros  
**Accionado:** Procuraduría Provincial de Garzón  
**Fecha:** 14 de noviembre de 2023

## NORMA PROCESAL DISCIPLINARIA / INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS ESTUVO JUSTIFICADA

### Problema Jurídico

“Corresponde a esta Corporación establecer si la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE GARZÓN, incumple las normas contenidas en los artículos 208, 213 y 217 de la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, modificada por la Ley 2094 de 2021 “Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, y en tal sentido debe ordenarse que un término de cuarenta y ocho (48) horas, evalúe las Indagaciones preliminares y las investigaciones preliminares, tomando las decisiones pertinentes (auto de apertura de investigación, formular pliego de cargos o decisión de archivo) en los procesos disciplinarios llevados a cabo en contra de los señores Cesar Germán Roa, Alcalde del municipio de Gigante Huila, y Josué Manrique Murcia, Exalcalde del municipio de Gigante Huila (...)”

### Extracto

“Por último, señaló que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021 “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, la Procuraduría General de la Nación estableció un PLAN DE DESCONGESTIÓN frente a los procesos en riesgo de prescripción, siendo priorizados en su despacho 127 procesos, de los cuales ya fueron evaluados 121, quedando pendientes 8 procesos, dentro de los cuales se encuentran los procesos E-2019-450833 y E-2020-163469 en los que figura como investigado/indagado el señor JOSUE MANRIQUE MURCIA. Argumentos que para la Sala resultan valederos y justifican la mora en el trámite de los procesos disciplinarios que se adelantan contra los señores Cesar German Roa, Alcalde de Gigante Huila, y Josué Manrique Murcia, Exalcalde de Gigante Huila. Adicionalmente, resulta importante precisar al accionante que con ocasión de la emergencia sanitaria por la pandemia a nivel mundial del COVID-19, la Procuraduría General de la Nación, en garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, desde



el 17 de marzo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2020, suspendió los términos en todas las actuaciones disciplinarias a su cargo, de conformidad con las Resoluciones Nos. 128 de 16 de marzo de 2020, 136 de 24 de marzo de 2020, 148 de 3 de abril de 2020, 173 de 17 de abril de 2020, 184 de 24 de abril de 2020 y 204 del 8 de mayo de 2020.

En ese orden de ideas, si bien las disposiciones normativas señalan unos términos, que es deber de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a través de sus delegadas, regionales y provinciales cumplir, se advierten razones que justifican la mora en las decisiones de evaluación de la indagación preliminar y la investigación disciplinaria en los procesos disciplinarios que se adelantan en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón en contra de los señores Cesar German Roa, Alcalde de Gigante Huila, y Josué Manrique Murcia, Exalcalde de Gigante Huila, frente a la cual se han tomado las medidas pertinentes como la implementación de un plan de descongestión, para los procesos más antiguos, entre los cuales pendientes de la totalidad de los que fueron seleccionados ocho, de los cuales se encuentran dos procesos que vigila la VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA “MOVIMIENTO JUVENIL GIGANTEÑO”.

Y en cuanto, a la decisión de suspensión provisional, debe indicarse que el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 señala su procedencia cuando “se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere”, valoración que se debe realizar para cada situación particular en los 14 procesos que adelanta la Procuradora Provincial de Instrucción de Garzón señores Cesar German Roa, Alcalde de Gigante Huila, y Josué Manrique Murcia, Exalcalde de Gigante Huila, sin que se pueda pretender a través de la acción de cumplimiento, se emita una orden a la autoridad disciplinaria de suspender provisionalmente a una persona que es objeto de una investigación disciplinaria.

Finalmente, resulta importante advertir al accionante que por el hecho de que la entidad demandada exceda los términos para para adelantar las diligencias de la indagación preliminar y la investigación disciplinaria dentro de los procesos disciplinarios, ello no afecta con nulidad las decisiones definitivas que resulten, como lo ha reiterado el Consejo de Estado (...)

Así las cosas, los anteriores argumentos conducen a la Sala a confirmar el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

[Sentencia del 14 de noviembre de 2023, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41001333300520230022701](#)





Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2022 00036 00
Accionante:	Adadier Perdomo Urquina
Accionado:	Departamento del Huila y Otros
Fecha:	28 de noviembre de 2023

VULNERACIÓN DERECHOS COLECTIVOS POR AFECTACIÓN DE FUENTES  
HÍDRICAS / HECHO SUPERADO / ÓRDENES DE CONTROL PERMANENTE  
SOBRE POTABILIDAD DE AGUA

Problema Jurídico

- “i) Determinar las condiciones de la actividad agrícola realizada por las empresas C.I. Colombia Paradise S.A.S. y Manar Fruit S.A.S. en la vereda “El Silencio” del municipio de Acevedo; si el terreno donde se desarrolla la actividad agropecuaria forma parte del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía de Peñas Blancas y; si dicha actividad ha sido desarrollada en una zona protegida.
- ii) Establecer si se ha generado un daño latente y progresivo sobre el ecosistema circundante, incluyendo las fuentes hídricas que abastecen los acueductos regionales “Santa Ana”, “La Victoria, La Unión y Cristo Rey”; “Los Ángeles-El Diviso-San José de Corinto” y “La Marimba” y; con ello la vulneración de los derechos colectivos: a) al goce de un ambiente sano, b) moralidad administrativa, c) existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; d) la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; e) la seguridad y salubridad públicas; f) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; g) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; h) el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y, i) los derechos de los consumidores y usuarios.
- iii) Y, finalmente, colegir si las autoridades encargadas del deber de vigilancia y control y protección ambiental en la zona y de la protección de estos derechos colectivos, lo han desatendido.

La tesis que desarrollará la corporación, teniendo en cuenta los hechos probados, es que la actividad agrícola desarrollada por las empresas C.I. Colombia Paradise S.A.S. y

Manar Fruit S.A.S. en la vereda “El Silencio” del municipio de Acevedo, fue adelantada en terrenos que forman parte del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Serranía de Peñas Blancas y permiten su desarrollo en forma restringida.

Asimismo, que las demandadas C.I. Colombia Paradise S.A.S. y Manar Fruit S.A.S. generaron afectaciones ambientales por i) captar agua de dominio público sin concesión, ii) hacer vertimiento de las aguas usadas sin contar con la autorización y iii) por tala de árboles (o aprovechamiento forestal), y con ello se vulneraron los derechos colectivos i) al goce de un ambiente sano, ii) existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, iii) La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; no obstante, la CAM como autoridad ambiental, impuso medidas preventivas y sancionatorias, que fueron acatadas, reuniéndose los supuestos jurisprudenciales para la carencia actual de objeto por hecho superado.”

## Extracto

“Bajo los anteriores derroteros, se encuentra probado que los predios “El Cedro” y “El Silencio” y “El Palacio El Horizonte” donde las demandadas C.I. Colombia Paradise S.A.S. y ManarFruit S.A.S. realizan actividad agrícola de cultivo de aguacate se encuentran ubicados en el municipio de Acevedo – Departamento del Huila, forman parte del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Serranía de Peñas Blancas y tienen un porcentaje de uso sostenible-subzona para el Desarrollo.

Asimismo, que en desarrollo de dicha actividad dichas empresas realizaron afectaciones ambientales de actividad antrópica con fines agrícolas sobre la zona forestal protectora de cuerpos de agua; captación ilegal de recurso hídrico; canalización e intervención de nacimientos de agua; vertimiento de aguas residuales; rocería de área forestal protectora de drenaje continuo; disposición de residuos orgánicos e inorgánicos y; la preparación y utilización indebida de agroquímicos.  
(...)

Al unísono con ello, de los diferentes conceptos técnicos posteriores a las visitas oculares, no se evidenció la necesidad de la imposición de medidas compensatorias; en la medida que la suspensión de las actividades antrópicas agrícolas, la delimitación de la zona donde ésta se puede ejecutar, así como, de la ronda forestal de protección de los cuerpos de agua, ha permitido la recuperación del revestimiento vegetal con el apoyo de la plantación de 2000 especies vegetales de la zona por parte de uno de los infractores. Además, la empresa C.I. Colombia Paradise S.A.S., con el objetivo de analizar la calidad del recurso hídrico, arrió resultados del análisis de agua físico-

químico y organolépticas aguas arriba y debajo de la bocatoma del acueducto regional “Santa Ana”, encontrándose dentro de los límites permitidos.

En esta instancia, es menester indicar que la autoridad ambiental CAM, adoptó las medidas necesarias de protección de los derechos o intereses colectivos vulnerados con la conducta de las empresas C.I. Colombia Paradise S.A.S. y Manar Fruit S.A.S.; por lo tanto, se colige que ha cesado tal vulneración con las medidas preventivas efectivizadas y; al momento de proferir esta sentencia, por sustracción de materia, no se es posible impartir órdenes de amparo, razón por la cual media carencia actual de objeto por hecho superado.

En tal sentido, la Sala declarará que existió vulneración a los derechos colectivos ya citados, pero no hay lugar a acceder a las pretensiones ni adoptar alguna medida de protección, por operar la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, como se expuso.

No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar que a futuro estas empresas no realicen actividades que vulneren tales derechos colectivos como se demostró lo hicieron en oportunidad anterior, la Sala considera necesario que se efectúen controles permanentes sobre la potabilidad del agua que afecta a estas poblaciones, por lo que se adoptarán medidas consistentes en que las empresas C.I. Colombia Paradise S.A.S y Manar Fruit S.A.S realicen controles fitosanitarios cada 6 meses a las fuentes hídricas principales y secundarias de las bocatomas de los acueductos regionales de las veredas “Santa Ana”, “La Unión Victoria y Cristo Rey”, “La Marimba”, “Los Ángeles el Diviso y San José de Corinto” del municipio de Acevedo, de forma permanente mientras operen en esta zona, y presenten los resultados de los mismos al Municipio de Acevedo y a la CAM quienes adoptarán las medidas a que haya lugar a efectos de garantizar la potabilidad del agua.”

[Sentencia del 28 de noviembre de 2023, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41001233300020220003600](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	José Miller Lugo Barrera
<b>Instancia:</b>	Primera
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2022 00050 00
<b>Accionante:</b>	Personería Municipal de Isnos
<b>Accionado:</b>	Junta de Acueducto Regional de los Ídolos, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
<b>Fecha:</b>	5 de diciembre de 2023

## VULNERACIÓN DERECHOS COLECTIVOS POR SUMINISTRO IRREGULAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE / APROBACIÓN DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

### Problema Jurídico

“La Sala debe determinar ¿si es procedente impartirle aprobación al pacto de cumplimiento celebrado entre la Personería del Municipio de Isnos – Huila con la Junta de Acueducto Regional de los Ídolos, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y el Municipio de Isnos - Huila, en el asunto de la referencia, en el que se pretende la protección de los derechos colectivos relacionados con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y salubridad pública, a los derechos de los consumidores y usuarios, ante el suministro irregular del servicio de agua potable a las veredas Las Guacas y Alto del Tigre del municipio de Isnos?

(...)

La Sala impartirá aprobación al acuerdo al cual llegaron las partes, toda vez que el compromiso adquirido por el municipio de Isnos – Huila con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, se encuentra dentro de las competencias que por Ley le fueron asignadas y con el mismo se garantizan los derechos colectivos aludidos en la presente acción popular.”

### Extracto

“... [L]a Sala advierte que el asunto gira en torno a efectivizar las funciones tanto del municipio de Isnos, la CAM y la Junta Administradora de Acueducto “Los Ídolos”, pues dentro de sus competencias se encuentra la de garantizar, administrar y vigilar el suministro de agua potable a las comunidades rurales.

Se resalta que de acuerdo al marco normativo y jurisprudencial antes citado, le compete al municipio de Isnos garantizar la prestación efectiva de los servicios

públicos, por lo tanto, le corresponde realizar todas las gestiones administrativas y establecer medidas técnicas y operativas en el caso que dificulte su efectivo suministro, a efectos de materializar el suministro del agua a las veredas ubicadas en su jurisdicción bien sea que lo haga directamente o a través de particulares o comunidades organizadas como las Juntas de Acción Comunal.

Así las cosas, para la Sala es claro que la Alcaldía del municipio de Isnos – Huila, ha realizado las respectivas gestiones administrativas para el efectivo suministro de agua en las veredas Guacas y Alto del Tigre del Municipio de Isnos – Huila, al suscribir el Convenio interadministrativo No 004 de 23 de diciembre de 2020, con la entidad encargada de adelantar los estudios y diseños de los acueductos veredales para el caso AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., con un aporte económico por parte del Municipio de Isnos de SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$62.000.000), sin embargo, ante el compromiso adquirido en la audiencia de pacto de cumplimiento, dicho ente territorial en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, permite que cesen la posible afectación de los derechos colectivos a la comunidad residente en las veredas mencionadas.

En resumen, como el municipio de Isnos - Huila se encuentra realizando las gestiones administrativas y operativas tendientes a la puesta en marcha del proyecto de construcción del acueducto veredal y con el cual serán beneficiados las veredas Guacas y el Alto del Tigre, dentro del marco de obligaciones que compete como primera autoridad municipal y a su vez, se tiene que la vigilancia, control y preservación de las fuentes hídricas se encuentra a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, y que se comprometió a ejercer las mismas en la fuente denominada como “La Brava” que hace parte del permiso de concesión de aguas otorgada a la Junta Administradora Regional de Acueducto los Ídolos, para que su uso sea exclusivamente doméstico, a efectos de garantizar el derecho al agua para aquellas personas ubicadas en dichos sectores, se concluye que la propuesta presentada se encuentra acorde con la normatividad vigente y demás garantías y derechos constitucionales aludidos.”

[Sentencia del 5 de diciembre de 2023, M.P. José Miller Lugo Barrero, radicación: 41001233300020220005000](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Jorge Alirio Cortés Soto
<b>Instancia:</b>	Única
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2023 00058 00
<b>Demandante:</b>	Edwin Alexis Romero Mejía
<b>Demandado:</b>	Universidad Surcolombiana y Otros
<b>Fecha:</b>	7 de noviembre de 2023

## ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO DE DOCENTE EXPEDIDO CON INFRACCIÓN EN LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / NO ACREDITACIÓN DEL REQUISITO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

### Problema Jurídico

“Debe anularse la Resolución No. P0276 de 2023 por medio de la cual la USCO nombró al señor Neftalí Vargas Polanía como docente de medio tiempo adscrito a la facultad de salud, porque incurrió en falsa motivación e infracción de las normas en que debería fundarse, por cuanto no cumplió el requisito mínimo de dos años de experiencia docente.

La tesis del Tribunal es que debe declararse la nulidad del acto administrativo demandado, por haberse expedido con infracción de la norma superior en que debió fundarse, tal como se argumentara en la demanda.

Para sustentar dicha tesis se analizará: i) la obligatoriedad de las reglas dentro de un concurso público de méritos, ii) la experiencia en docencia universitaria y cómo se acredita, iii) la naturaleza jurídica de los hospitales universitarios, iv) la relación docencia-servicio en programas de formación de talento humano del área de salud y por último, v) el caso concreto y el cargo de nulidad.”

### Extracto

“(…) [E]l señor Neftalí Vargas Polanía al momento de la convocatoria no contaba con el requisito de experiencia en docencia universitaria de 2 años, pues pretendió acreditarla en entidades que no están autorizadas legalmente para dicho propósito, específicamente en el Hospital Universitario de Neiva que no ha sido reconocido como tal.

Además, la experiencia certificada tanto por el Hospital Universitario de Neiva y por el sindicato de gremio al que está vinculado el señor Neftalí Vargas Polanía, no indican con claridad el tiempo de dedicación a la docencia universitaria, pues señalaron que

dicho ciudadano estuvo vinculado y/o afiliado y en ese contexto cumplió con algunas funciones propias de la práctica médica y desarrolló la colaboración en actividades docentes, lo cual en manera alguna significa que dentro del giro ordinario de sus funciones debía dirigir la práctica docente, solamente colaborar en ella.

Igualmente, las vinculaciones como médico de planta y asociado sindical se dieron en el mismo tiempo sin que se precisara por la agremiación sindical ni se allegara la prueba de la actividad para la cual fue contratada y para la cual se vinculó al señor Vargas Polanía, no obstante que el artículo 3° de la Ley 269 de 1996 permite la concurrencia de horarios en actividades docente y asistencial.

En ese orden, se logró derruir la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, al infringir el artículo 125 de la Constitución, el artículo 70 de la Ley 30 de 1992, los artículos 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 Decreto 1083 de 2015 y la Resolución N° 226 del 7 de septiembre de 2021 del Rector (E) de la USCO que convocó al “Concurso de Méritos 2021”, lo cual conlleva a que el acto acusado deba anularse y de contera se declararán no probadas las excepciones de mérito propuestas por la pasiva.

Para finalizar, como se ha venido sosteniendo que el Hospital Universitario de Neiva no podía certificar la experiencia en docencia universitaria, por eso es innecesario resolver si dicha certificación fue expedida por funcionario sin competencia, porque primero habría que afirmar que la entidad pública a la que se halla adscrito era la que válidamente podía certificarlo, y como quedó claro, no fue así.”

[Sentencia del 7 de noviembre de 2023, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001233300020230005800](#)



# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



<b>Magistrado Ponente:</b>	Ramiro Aponte Pino
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41001 33 33 006 2018 00099 01
<b>Demandante:</b>	Ana Valderrama Guzmán
<b>Demandado:</b>	Nación – Rama Judicial
<b>Fecha:</b>	7 de noviembre de 2023

## IMPROCEDENCIA DE LA ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR / PROVISIÓN DE CARGO A QUIEN SUPERÓ EL CONCURSO DE MÉRITOS / ENTIDAD AMPARÓ EL FUERO DE ESTABILIDAD POR HABER SIDO LA ÚLTIMA EN SER REMOVIDA / PREPENSIONADA

### Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar el fallo de primera instancia, en particular, precisar: i) si además de prepensionada, la demandante ostenta estabilidad reforzada, dada su condición de mujer cabeza de familia; ii) si el proceso de desvinculación se fundamentó en una causal objetiva (provisión de cargos en virtud del concurso de méritos); y iii) si la autoridad demandada desplegó acciones afirmativas con el fin de otorgarle un trato preferencial, a efectos de garantizarle el goce efectivo de sus derechos fundamentales.”

### Extracto

“a.- Ab initio, advierte la Sala que en el momento de la desvinculación (8 de octubre de 2017), la señora Ana Valderrama Guzmán ostentaba la condición de prepensionada, porque tenía 55 años y le faltaban 105.57 semanas para cumplir las 1300 semanas que exige el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 (acumulaba 1.194,43 semanas cotizadas según el reporte de Colpensiones actualizado a 3 de octubre de 2017); es decir, menos de tres años.

b.- Sin embargo, no hay lugar a reconocerle a la demandante la calidad de “mujer cabeza de familia”, como quiera que en el recurso de apelación no se formularon reparos concretos para controvertir el argumento inicial esgrimido por el a quo para no valorar dicha condición; es decir, que la actuación administrativa se centró a analizar el fuero de estabilidad prepensional, habida cuenta de que el apoderado de la parte actora se limitó a relacionar los actos demandados. (...)

c.- Está probado que la desvinculación de la demandante se fundamentó en una causa objetiva; consistente en la provisión del cargo asistente administrativo grado 5, grupo

12 con la persona que superó el concurso de méritos convocado por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila (Acuerdo 0118 de 2009); siguiendo el orden establecido en el registro de elegibles (Resolución CSJHR16-3 del 7 de enero de 2016).

En efecto, la señora Diva Quintero Garrido fue incluida en la lista de elegibles conformada mediante Acuerdo CSJHUA17-473 del 19 de julio de 2017, y optó legítimamente por la referida vacante (publicada del 4 al 10 de julio de 2017); de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo PSAA08-4856 de 2008. Elección que no podía ser desconocida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

d.- El hecho de que la desvinculación de la demandante se haya dado tácita o implícitamente con el nombramiento en propiedad de la señora Diva Quintero Garrido a través de la Resolución DESAJNER17-28712 del 28 de septiembre de 2017, no implica, de suyo, una actuación irregular; porque la provisión del cargo se dio en el marco de un concurso de méritos; cuya motivación clara y expresa fue conocida por la demandante en el oficio DESAJNEO17-4808 del 2 de octubre de 2017.

e.- Se encuentra acreditado que la entidad demandada aplicó una medida afirmativa a favor de la accionante, porque el cargo de asistente administrativo, grado 5, grupo 12 que desempeñaba en provisionalidad fue el último en ser provisto en propiedad (los nombramientos para ese cargo se iniciaron el 7 de abril de 2016 y la demandante fue desvinculada el 8 de octubre de 2017); lo cual, se colige del contenido del oficio DESAJNEO18- 7496 del 13 de noviembre de 2018 y de los actos de nombramiento y posesión que obran en el expediente.

f.- En el momento de la desvinculación, en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no existían cargos vacantes asistente administrativo grado 5, grupo 12; en los cuales se hubiera podido analizar su reubicación.  
(...)

h.- Así las cosas, considera la Sala que la desvinculación de la demandante se fundamentó en la necesidad de garantizarle la provisión del cargo a quien superó el concurso de méritos; amén de que la entidad accionada amparó el fuero de estabilidad de aquella, pue fue la última en ser removida. Aunado al hecho de que no se acreditó que cumpliera los requisitos para ser vinculada prioritariamente en otros cargos vacantes de igual o superior jerarquía.

i.- Merced a lo anterior, se confirmará la providencia impugnada.”

[Sentencia de 7 de noviembre de 2023, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001333300620180009901](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



<b>Magistrado Ponente:</b>	Jorge Alirio Cortés Soto
<b>Instancia:</b>	Primera
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2015 00669 00 41 001 23 33 000 2016 00372 00
<b>Demandante:</b>	César Augusto Montero González Luis Carlos Muñoz Vargas
<b>Demandado:</b>	Colpensiones
<b>Fecha:</b>	21 de noviembre de 2023

## PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A HIJOS- REQUISITOS ACREDITADOS / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A CÓNYUGE - NO BASTA ACREDITAR UNICAMENTE EL VÍNCULO SINO TAMBIÉN CONVIVENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS

### Problema Jurídico

“1) En el expediente de Luis Carlos Muñoz Vargas:

- 1.1. ¿Deben anularse los actos administrativos conformados por las resoluciones GNR 20072 de enero 21 de 2014, GNR 306263 de septiembre 2 de 2014 y VPB 12512 de febrero 13 de 2015 mediante las cuales Colpensiones le negó al demandante y demandado la pensión de sobrevivientes por la muerte de la señora Sonia Inés Vargas Polanía, madre y cónyuge respectivamente, por haber sido expedidas con falsa motivación e incurrido en violación de las normas superiores en que los actos debieron fundarse?
- 1.2. ¿El señor Luis Carlos Muñoz Vargas no acreditó la calidad de estudiante y el señor César Augusto Montero González, no acreditó el tiempo de convivencia requerido para tener derecho a la pensión de sobrevivientes y por ello no les asiste el derecho incoado?

2) En el expediente de César Augusto Montero González:

- 2.1. ¿Son nulas las Resoluciones No. GNR 20072 del 21 de enero de 2014 y No. VPB 12512 del 13 de febrero de 2015 mediante las cuales Colpensiones le negó al señor César Augusto Montero González en calidad de cónyuge, la pensión de sobrevivientes por la muerte de la señora Sonia Inés Vargas Polanía, al haber sido expedidas con violación de las normas en que deberían fundarse y falsa motivación, que dan lugar a que se restablezca el derecho incoado?

2.2. ¿El señor César Augusto Montero González, no acreditó el tiempo de convivencia requerido para tener derecho a la pensión de sobrevivientes y por ello no le asiste el derecho incoado?

La tesis del Tribunal es que se deben anular parcialmente las resoluciones atacadas y acceder a la pensión de sobrevivientes pretendida por el señor Luis Carlos Muñoz Vargas, en cuanto acreditó ser beneficiario de la misma como hijo de la causante y estar estudiando al tiempo del deceso y, negarse las pretensiones del señor César Augusto Montero González porque no acreditó la convivencia por el término de ley con la señora Sonia Inés Vargas Polanía.”

### Extracto

**“6.2. La calidad de los beneficiarios.** A reclamar la pensión de sobrevivientes concurrieron un hijo y el cónyuge sobreviviente, habiéndose acreditado que el señor Luis Carlos Muñoz Vargas fue hijo de Sonia Inés Vargas Polanía, nacido el 21 de marzo de 1992 y que el señor César Augusto Montero González fue casado con la antes citada el 12 de mayo de 2007, de acuerdo con los correspondientes registros civil de nacimiento y de matrimonio que se allegaron en sus respectivos expedientes (f. 35 C. Ppal #1, f. 25, C. Ppal #1, respectivamente). (...)

**6.5. La calidad de estudiante dependiente de la afiliada.** El señor Luis Carlos Muñoz Vargas acreditó también que al tiempo de la muerte de su progenitora Sonia Inés Vargas Polanía, convivía con ella en la misma casa y dependía económicamente de ella (...)

Ahora, en cuanto a la calidad de estudiante, obra el certificado emitido el 20 de marzo de 2014 por el Colegio Santa Clara de Hungría (f. 43, C Ppal 1) mediante el cual se acreditó que el señor Luis Carlos Muñoz Vargas curso y aprobó el grado 11 de educación media durante el año lectivo 2010, o sea que, para el tiempo del deceso de su progenitora acababa de graduarse en dicho nivel educativo. (...)

De lo anterior se colige que Luis Carlos Muñoz Vargas, previo al fallecimiento de su progenitora, ya había desplegado acciones tendentes a iniciar estudios superiores y posteriormente realizó los estudios que se han enunciado, lo que demuestra que siempre mantuvo su condición de estudiante y por tanto, con derecho a la prestación reclamada, lo que conduce a señalar que los actos atacados desconocieron las normas que le otorgan dicho beneficio y hay lugar a su anulación, empero el demandante Muñoz Vargas debe acreditar ante Colpensiones que durante los años 2015 hasta el 21 de marzo de 2017 en que alcanzó los 25 años de edad, mantuvo su condición de estudiante, toda vez que en dichos lapsos no obra prueba en tal sentido.

**6.6. La convivencia del cónyuge sobreviviente.** De las pruebas documentales aportadas por el demandado César Augusto Montero González, se pudo demostrar que convivió con la señora Sonia Inés Vargas Polanía al menos desde que contrajo matrimonio el 12 de mayo de 2007 hasta el deceso de su cónyuge el 8 de enero de 2011, lo que arroja una convivencia cierta de 3 años, 7 meses y 26 días que no son suficientes para acceder a la pensión de sobrevivientes. (...)

De otro lado el Tribunal no acoge el precedente invocado por el señor Montero González en los alegatos<sup>14</sup> del expediente donde obra como demandado, en la medida que no es una sentencia de unificación que haga obligatorio su cumplimiento y porque no basta acreditar únicamente el vínculo matrimonial o de compañeros para acceder a la pensión de sobrevivientes, sino que el artículo 47 de la ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003) exige la convivencia mínima de 5 años antes de la muerte del afiliado fallecido con vocación de pensionarse y lo cual se predica para pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, en aras de evitar fraudes con relaciones de última hora. Lo anterior fue expuesto por el Consejo de Estado<sup>15</sup> en sentencia de unificación de agosto 11 de 2022, siguiendo a la Corte Constitucional, al señalar que el término mínimo de convivencia que exige dicha norma, opera tanto para los casos de pensión de sobrevivientes (afiliado fallecido) como de sustitución pensional (pensionado fallecido): (...)

Así las cosas, se itera que al no haber acreditado el señor Montero González el término mínimo de convivencia con la afiliada fallecida, no tiene derecho a que se le conceda la pensión de sobrevivientes y de contera a que se anulen los actos demandados donde ello le fue denegado.”

[Sentencia del 21 de noviembre de 2023, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41001233300020150066900](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



<b>Magistrado Ponente:</b>	Ramiro Aponte Pino
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 007 2019 00381 01
<b>Demandante:</b>	Martha Isabel Aquite y Otro
<b>Demandado:</b>	Municipio de Neiva
<b>Fecha:</b>	05 de diciembre de 2023

**PRIMA EXTRALEGAL / LEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE NO CONTINÚA RECONOCIENDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y PRIMA TÉCNICA DEPARTAMENTAL / FALTA DE COMPETENCIA DE ASAMBLEAS Y CONCEJOS PARA CREAR FACTORES O EMOLUMENTOS SALARIALES / MEDIO DE CONTROL DEBÍA INCOARSE 4 MESES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / POSIBILIDAD DE INCOAR MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD**

## Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la decisión de primera instancia; precisando si la demandada soslayó el trámite que regula la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto, y determinar si las demandantes tienen derecho a percibir la prima de antigüedad y la prima técnica departamental.”

## Extracto

### “5. Inexistencia de derechos adquiridos.

En opinión del tribunal de cierre de esta jurisdicción, no existen derechos adquiridos cuando contraría el orden constitucional y legal: “Se observa entonces, que si los derechos deben respetar las leyes civiles para que puedan ser considerados como adquiridos, mal podrían entonces ser garantizados aquellos que contrarían la Constitución Política en cuanto que es norma fundante del ordenamiento. No puede afirmarse que una situación jurídica subjetiva se ha consolidado y que ha ingresado definitivamente al patrimonio de una persona, cuando ha sido creada desconociendo el régimen constitucional y legal que imperaba al momento de su definición, pues carece de un justo título”.

### 6.- Análisis de fondo.

a.- Se encuentra acreditado que las señoras Martha Isabel Aquite Ramírez y Nury Quintero Rodríguez se vincularon al servicio educativo oficial el 16 de abril de 1980 y

el 21 de febrero de 1989, respectivamente. Y, en su orden, actualmente fungen en calidad de auxiliar administrativo, grado 22 en las Instituciones Educativas Gabriel García Márquez y Santa Librada de Neiva.

b.- También está probado que desde el 1º de enero de 2003 y hasta el mes de diciembre de 2017 devengaron la prima de antigüedad y la prima técnica departamental (consagradas en los artículos 8 y 11 de la Ordenanza 022 de 200310).

c.- Por medio del oficio 159 del 22 de enero de 2018, el secretario de educación de Neiva le informó a la profesional de recursos humanos que se inaplicaba por inconstitucional la ordenanza que las creó, y que no se podrían seguir cancelando; dada su inconstitucionalidad e ilegalidad.

d.- Teniendo en cuenta que las accionantes dejaron de percibir las referidas primas en cumplimiento de la ejecución de dicho acto (y ello se reflejó en la nómina del mes de enero de 2018), tenían a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y pudieron acudir a la vía judicial dentro de los cuatro meses siguientes (artículo 164, numeral 2º, literal d del CPACA11). Sin embargo, no lo hicieron, y se limitaron a solicitar el restablecimiento de las primas 13 meses después (el 5 y el 12 de abril de 2019); obteniendo respuesta negativa a través del acto enjuiciado (resolución 1946 del 8 de agosto de 2019).

Ahora bien, teniendo en cuenta que dichas primas son prestaciones de naturaleza periódica, en los términos consagrados en el artículo 162, numeral 1º, literal c) del CPACA; el medio de control se podría instaurar en cualquier tiempo; pero en razón a que la nulidad de dicho acto no fue expresamente solicitada; el análisis de su legalidad no se puede abordar oficiosamente; incluyendo la omisión de surtir trámite para llevar a cabo la revocatoria directa, regulada en el artículo 97 del CPACA.

Lo anterior, aunado al hecho de que no existe duda que las referidas primas se crearon contrariando el ordenamiento superior (porque la duma departamental carecía de facultades para crearlas), y merced a dicha circunstancia, la resolución que negó la reanudación de su pago se ajustó al marco normativo superior, porque no se podía darle la connotación de derecho adquirido al ser reconocidas ilegalmente.

e.- Merced a lo anterior, se confirmará la providencia impugnada.”

[Sentencia del 5 de diciembre de 2023, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001333300720190038101](#)





<b>Magistrado Ponente:</b>	Gerardo Iván Muñoz Hermida
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 001 2013 00399 01
<b>Demandante:</b>	Luis Eduardo Tamayo Polanco
<b>Demandado:</b>	Instituto de Transporte y Tránsito del Huila y Otro
<b>Fecha:</b>	14 de noviembre de 2023

## RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DE REGISTRO DE EMBARGO DE VEHÍCULO - ACREDITADA / AUNQUE LA OFICINA DE TRANSITO INFORMÓ EL REGISTRO, NO SE MATERIALIZÓ / LA VICTIMA NO TUVO INGERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

### Problema Jurídico

“Atendiendo las exigencias derivadas de la estructura de la responsabilidad patrimonial pública, la Sala abordará como problemas jurídicos los relacionados con los argumentos presentador por la parte demandante frente a la sentencia adiada 22 de mayo de 2018, que, pese a acceder a las pretensiones de la demanda, aplicó la figura de la concausa o culpa de la víctima y redujo la condena en un 50%. Por lo tanto, habrá que establecerse, si en la ocurrencia del daño, del cual no hay reparo alguno frente a su antijuridicidad al no haber sido apelada la sentencia por parte del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, conforme a los hechos, tuvo injerencia el actuar del demandante para que se le aplicara la concausa y redujera la condena en un 50%, por lo que, habrá que determinar si hubo culpa de la víctima en la ocurrencia del mismo. De otro lado, si hay lugar a incrementar la condena de perjuicios morales.”

### Extracto

“Sucedee que, en el presente caso, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, tuvo como argumento para estimar configurada la concurrencia de culpas, la inactividad del demandante al no haber advertido que el oficio mediante el cual la Oficina de Tránsito comunicaba el supuesto registro de la medida de embargo, iba sin el respectivo certificado de tradición del vehículo TBK 918, donde debía aparecer registrada la medida, lo que condujo a que, entre la fecha del oficio – 30 de octubre de 2010 – y la fecha del primer traspaso – 5 de noviembre de 2010 – transcurrieran 5 días sin advertir lo sucedido.

Encuentra la Sala y tal como lo advirtiera el apoderado actor en su escrito de apelación, que carece de sustento tal apreciación, puesto que, partiendo del hecho que tuviera la carga el actor de advertir dicho erro, la actuación procesal muestra otra realidad, pues la verdad es que no tuvo tiempo para enterarse.

Según se desprende del proceso ejecutivo, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Neiva, libró el Oficio No. 1616 del 27 de octubre de 2010, comunicando a la oficina de transporte y tránsito la medida de embargo del vehículo de placas TBK 918 denunciado de propiedad de la demandada María Melba Rodríguez, el cual aparece con fecha de recibido el 28-10- 2010.

(...)

De donde se desprende que, la conducta del demandante no tuvo injerencia alguna en la generación del daño, pues, de un lado y en las voces del artículo 681.1 del C. de P. Civil, correspondía a la oficina de tránsito adelantar el trámite de registro de la medida cautelar y expedición del certificado de tradición correspondiente, y, si bien cometió el error de no hacerlo y no expedirlo, lo cierto es que, para la fecha en que el oficio comunicando el registro de embargo llegó al juzgado civil – 08-NOV-2010 - y donde el demandante podía enterarse de lo sucedido, ya el daño se había consumado, pues el traspaso del vehículo ya se había efectuado – 05-NOV-2010 -. Por consiguiente, la excepción de culpa de la víctima y llamada concausa, no resulta probada y, por consiguiente, se habrá que revocar y declarar que al demandante le asiste el derecho de recibir en un 100% la condena impuesta por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, en cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, los perjuicios morales y la condena en costas.

En cuanto a lo pedido por el apoderado actor en su recurso de apelación, consistente en que se aumente la condena de los perjuicios morales al tope máximo señalado en la sentencia de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sala Plena Sección Tercera. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa – Rad. 66001233100020010073101 (26251), 2 de agosto de 2014, cabe precisar, que dada la finalidad de la misma, que pretendió unificar la condena y liquidación de perjuicios en caso de muerte, y donde se diseñó cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, no resulta aplicable al caso, pues, la presente controversia tiene su origen en la pérdida de oportunidad que tuvo el demandante de haber visto satisfecha su obligación ejecutada, de haberse perfeccionado por parte de la autoridad de tránsito en debida forma el registro de la medida de embargo decretada sobre el vehículo TBK 918; por lo que, analizados los argumentos del juez de conocimiento para tasarlos en 10 s.m.l.m.v, resultan razonables y, dado que se le habían reducido a 5, a raíz de la concausa y en vista que se ha revocado la misma, habrá que reconocerse en su totalidad los 10 s.m.l.m.v. Por lo tanto, se niega el incremento de la condena de los perjuicios morales al tope máximo fijado en la sentencia de unificación aludida por el apoderado actor.”

[Sentencia del 14 de noviembre de 2023, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41001333300120130039901](#)



<b>Magistrada Ponente:</b>	Nelcy Vargas Tovar
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 006 2019 00195 01
<b>Demandante:</b>	José Robinson Trujillo Pérez y Otros
<b>Demandado:</b>	Ministerio de Educación Nacional y Otros
<b>Fecha:</b>	21 de noviembre de 2023

## FALLA DEL SERVICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO - ACREDITADA / DAÑO AL ESTUDIANTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO / QUEMADURAS POR MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

### Problema Jurídico

“La Sala se contrae a establecer, si las lesiones ocasionadas el 4 de octubre de 2017 al menor JOSÉ LUIS TRUJILLO SALINAS en la I. E. San Juan Bosco del Municipio de Palermo, comportan un daño antijurídico. En caso afirmativo, si este es imputable a la omisión de la demandada, o si, por el contrario, ha operado algún eximente de responsabilidad (hecho de un tercero).”

### Extracto

“Lo expuesto hasta el momento, permite al Tribunal concluir que las lesiones ocasionadas al menor José Luis Trujillo Salinas, contrario a lo advertido por el a quo, se generaron en virtud de una actividad programada y orientada por la I. E. San Juan Bosco del municipio de Palermo (feria tecnológica) y que, si bien los estudiantes incumplieron con la entrega del “objeto tecnológico” en la fecha y hora señalada, el docente Jorge Vivas Ramírez era conocedor de que los educandos allegaron tal objeto en la hora del descanso, al punto que se vio en la obligación de no recibirlos en forma extemporánea por estar cumpliendo otra actividad que le había sido programada, como refiere en su informe, sin haber impartido ninguna directriz tendiente a atender a los estudiantes, verbigracia, recibir los objetos tecnológicos y reprogramar su presentación, dejando al garete a los alumnos y contraviniendo el deber de vigilancia y custodia de los mismos.

Adicionalmente, se tiene que en virtud de la exigencia efectuada a los estudiantes de realizar un “objeto tecnológico”, los mismos ingresaron a la institución educativa alcohol (sustancia prohibida según los docentes declarantes), sin que las autoridades educativas se hubieran percatado de ello, resultando insuficiente el control que ejercían los coordinadores y celadores a la entrada de la institución, según refieren los

declarantes Héctor Egidio Trujillo Calderón (rector) y Cesar Augusto Narváez Lamilla (docente), pues al encontrarse en una “feria tecnológica” se requería una mayor vigilancia dado que los estudiantes podían ingresar sustancias, materiales o elementos que pusieran en riesgo su integridad, tal y como ocurrió con el menor José Luis Trujillo Salinas.

Fuera de lo expuesto, se tiene que, durante el descanso escolar del 4 de octubre de 2017 el personal docente de la I. E. San Juan Bosco debía realizar vigilancia a los estudiantes, como lo ordenaba la Resolución No. 007 del 10 de marzo de 201554, por la cual se define el acompañamiento del descanso de los estudiantes por parte de los docentes y directivos docentes de la I.E. San Juan Bosco de Palermo, labor para la cual fueron designadas el día de los hechos las docentes Amanda Lucia Sotelo y Magda Rosalía Velásquez, según la declaración del rector y así lo aceptan las mencionadas educadoras, la primera de las cuales declaró no haber presenciado los hechos porque era la encargada de vigilar el parque y la segunda refirió que, vio a los alumnos del salón 602 (al cual pertenecía José Luis Trujillo Salinas) aglomerados sin parecerle que manipularan elemento alguno y solo se dirigió a atender al menor lesionado cuando este salió corriendo al bebedero de agua.

Lo anterior, también pone de presente, a diferencia de lo establecido por el fallador de primera instancia, la omisión en el deber de cuidado de los menores por parte de la docente Rosalía Velásquez, pues al percatarse de la aglomeración de los menores y estar encargada de la custodia de los mismos durante el descanso, le correspondía a la educadora auscultar de inmediato lo que acontecía y tomar los correctivos tendientes a salvaguardar la integridad de los menores, evitando así el accidente que ocasionó las lesiones al infante Trujillo Salinas.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la responsabilidad del departamento del Huila está comprometida, pues como quedó demostrado, la I. E. San Juan Bosco del municipio de Palermo no ejerció el deber de vigilancia y cuidado del menor José Luis Trujillo Salinas, el cual se activó al ingresar al plantel educativo, omisión que conllevó o fue la causa desencadenante de las lesiones padecidas por el menor, acreditándose así la falla del servicio que permite imputar la responsabilidad al mencionado ente territorial.”

[Sentencia del 21 de noviembre de 2023, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001333300620190019501](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Enrique Dussán Cabrera
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 705 2015 00249 01
<b>Demandante:</b>	José Daniel Lavao Polanía
<b>Demandado:</b>	Ministerio de Defensa – Policía Nacional
<b>Fecha:</b>	5 de diciembre de 2023

## EXCESO DE AUTORIDAD POR FUERZA PUBLICA / FALLA DEL SERVICIO NO ACREDITADA / LESIONES OCASIONADAS A MENOR FUERON CONSECUENCIA DE FORCEJEIO

### Problema Jurídico

“Conforme la apelación de la parte actora y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es responsable por las lesiones causadas a José Daniel Lavao Polanía en hechos ocurridos el 10 de noviembre de 2013 por abuso de autoridad, y en consecuencia debe revocarse la sentencia de primera instancia. Previo a lo anterior, y teniendo en cuenta que con el recurso de apelación se allegó registro civil de defunción de José Daniel Lavao Polanía, se determinará la sucesión procesal del mencionado demandante.”

### Extracto

“Como quiera que en el recurso de apelación la parte actora hace consistir la responsabilidad de la entidad demandada en el uso excesivo de la fuerza que los miembros de la Policía Nacional ejercieron contra el señor José Daniel Lavao, durante un procedimiento de registro de ciudadano, la Sala analizará si a la luz de las pruebas aportadas al proceso, se logra demostrar la falla del servicio por parte de la entidad demandada, esto es, si existió un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, y si este fue razonable, necesario y proporcional.  
(...)

Finalmente, y como única prueba que obra a favor de las pretensiones de los demandantes, obra el testimonio de Nelcy Caviedes Córdoba, quien manifestó que vio cuando los policías golpeaban a José Daniel.

Sin embargo, la testigo es enfática en señalar que cuando salió de su casa ya se encontraba José Daniel en el suelo y al lado de él los agentes de policía, de tal suerte

que no conoció las circunstancias que acontecieron antes de ese momento, es decir, lo que los uniformados de policía afirman en su testimonio correspondió al momento en que llegaron al lugar reportado por la ciudadana, y le solicitaron a José Daniel la requisita voluntaria y este se negó, tratando de huir del lugar.  
(...)

En tal sentido, la ciudadana no puede dar fe de la razón por la que José Daniel se encontraba en el suelo, ni por la que supuestamente estaba recibiendo golpes por parte de los agentes.

Para la Sala, el testimonio de Nelcy Caviedes presenta inconsistencias que no le otorgan un grado de certeza a punto tal de atribuirle responsabilidad a la Policía Nacional. En contraste con lo anterior, con base en las declaraciones rendidas por los uniformados, en concordancia con el libro poblacional aportado y las lesiones presentadas por José Daniel según Informe pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal, se encuentra probado que los uniformados acudieron al lugar por la llamada de una ciudadana que manifestó que había un sujeto intentando ingresar a su casa, y dicho sujeto se trataba de José Daniel, quien estaba en estado de alicoramiento, y este se rehusó inicialmente a la requisita voluntaria, por lo que los uniformados tuvieron que hacer uso de la fuerza para lograr llevar a cabo el procedimiento de registro a personas e identificación, sin que ello conllevara necesariamente a un uso desproporcionado de la fuerza, pues las lesiones que sufrió no fueron consideradas de gran magnitud y pudieron haberse causado como consecuencia del forcejeo que se presentó entre los uniformados y José Daniel.

Bajo esta línea de razonamiento, no se aportan pruebas en el proceso que conduzcan con cierto grado de certeza a concluir que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional, y así las cosas una vez realizado el juicio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad que plantea el Consejo de Estado, la Sala concluye que el procedimiento adelantado y la actuación de los agentes de policía fue adecuada, y en consecuencia se confirmará el fallo de primera instancia.”

[Sentencia del 5 de diciembre de 2023, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41001333370520150024901](#)



<b>Magistrada Ponente:</b>	Nelcy Vargas Tovar
<b>Instancia:</b>	Primera
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2019 00577 00
<b>Demandante:</b>	Municipio de Neiva
<b>Demandado:</b>	Ministerio del Deporte
<b>Fecha:</b>	18 de diciembre de 2023

## PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD CONTABA CON LA FACULTAD PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO

### Problema Jurídico

“La controversia en el presente asunto se centra en determinar si hay lugar a declarar la nulidad de (i) la Resolución N° 1591 del 11 de septiembre de 2019, a través de la cual el Ministerio del Deporte liquidó unilateralmente el Convenio Interadministrativo N° 758 de 2013; y (ii) de la Resolución N° 1787 del 7 de octubre de 2019, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior; por presuntamente haberse expedido con infracción a las normas en que debían fundarse y falsa motivación. En caso afirmativo, establecer si es procedente la liquidación del Convenio Interadministrativo N° 758 de 2013, de modo que el municipio de Neiva no deba reintegrar recurso alguno.”

### Extracto

“En el sub examine, el Municipio de Neiva demanda la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales la Nación – Ministerio del Deporte, liquidó unilateralmente el Convenio Interadministrativo N° 758 de 2013, suscrito entre estas y el Departamento del Huila; estimando (i) que la entidad del orden nacional no se encontraba facultada para ello, y que (ii) la orden de liquidación carece de sustento fáctico.

Por su parte, la Nación – Ministerio del Deporte sostiene que la liquidación del convenio se dio por cumplimiento del plazo de ejecución, mas no por el ejercicio de una cláusula excepcional; y que el balance final se basó en las situaciones probadas en el expediente contractual del Convenio N° 758 de 2013. (...)

**(...) Primer cargo: infracción a las normas en que debían fundarse los actos demandados.**



En síntesis, la demanda alega que el Ministerio del Deporte no era competente para liquidar unilateralmente el Convenio Interadministrativo N° 758 de 2013, por tratarse de una figura asociativa que implica horizontalidad, y por no encontrarse la entidad expresamente facultada para ello. (...)

Así las cosas, para la Sala, el Ministerio del Deporte se encontraba facultado para liquidar unilateralmente el Convenio N° 758 de 2013, en la medida que así fue aceptado por las partes al momento de la suscripción del acuerdo; aunado a la naturaleza de las obligaciones en él contenidas, y a los roles asumidos por cada una de las partes en la ejecución del contrato.

Conforme a lo anterior, no se encuentra acreditada la presunta infracción a las normas en que debían fundarse las Resoluciones N° 1591 del 11 de septiembre de 2019, a través de la cual la demandada liquidó unilateralmente el Convenio Interadministrativo N° 758 de 2013 y ordenó el reembolso de unos dineros; y la Resolución N° 1787 del 7 de octubre de 2019, que revocó parcialmente el acto anterior. (...)

**(...) Segundo cargo: falsa motivación.**

De otro lado, el Municipio de Neiva estima que los actos enjuiciados carecen de sustento fáctico, puesto que la liquidación se respalda en ítems de ejecución de obra calculados por una interventoría respecto de la cual se había declarado la caducidad; motivo por el cual, su trabajo no podía ser tenido en cuenta, mucho menos para liquidar el convenio.

(...)

En ese sentido, si la entidad demandante busca que se desestime la liquidación efectuada por el Ministerio del Deporte, dado que esta no refleja la realidad ni fidelidad de las obras ejecutadas en el estadio Guillermo Plazas Alcid y, además, desconoce hechos ajenos que afectan el balance de cuentas del pluricitado convenio; ha debido, siquiera, acreditar cuál sería el balance real de cuentas del convenio, o exponer de manera clara y concreta los aspectos que, en su sentir, son erróneos en el cruce de cuentas unilateral.

Lo anterior, máxime si se pretende una nueva liquidación “de modo que no se haga efectiva la orden de reintegrar” dineros al Ministerio del Deporte; pedimento que exigiría, como mínimo, que el Municipio de Neiva hubiese probado el cumplimiento total de sus obligaciones y la correcta ejecución de las actividades contenidas en el convenio.

[Sentencia del 18 de diciembre de 2023, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001233300020190057700](#)

### **NOTA**

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado con los textos originales ubicados en la Secretaría del **Tribunal Administrativo del Huila**, o en el [aplicativo SAMAI](#).

### **CONTÁCTENOS**

**Tel. 8722638**

**Palacio de Justicia Neiva- Huila**

**Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108**

**Email: [reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co)**

**<http://ramajudicialdelhuila.gov.co/newSite/administrativo/>**

**<https://www.facebook.com/tribunaladministrativodelhuila>**